



República de Colombia



Sala Cuarta de Decisión Laboral

**LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE**  
**Magistrada Ponente**

**REFERENCIA:** PROCESO ORDINARIO LABORAL - **SENTENCIA**  
**RADICACIÓN.** 05001 31 05 **017 2021 00554 01**  
**DEMANDANTE:** DIEGO DE JESÚS VÉLEZ ROJAS  
**DEMANDADO:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Medellín, veintisiete (27) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

En la fecha, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 2213 de 2022, se reunió la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por las Magistradas LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL, MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ y LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE, quien actúa como ponente, con la finalidad de resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes y surtir el grado jurisdiccional de consulta en favor de la Gobernación, respecto de la sentencia proferida el 21 de junio de 2022, por el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Medellín.

**I. ANTECEDENTES**

Pretende el demandante que se declare que es beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo y Laudos Arbitrales vigentes suscritos entre el Sindicato de Trabajadores y Empleados del Departamento de Antioquia y la entidad demandada; en consecuencia, se condene a la Gobernación a reconocer y pagar la pensión de jubilación convencional de conformidad con la cláusula 12 de la CCT suscrita el 9 de diciembre de 1970 y presente en el art. 96 de la recopilación de normas convencionales, desde el momento en que cumplió los requisitos de edad y tiempo de servicios, junto con el retroactivo pensional debidamente indexado y los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993 (pág. 4 arch. 1 C01).

Como fundamentos fácticos relevantes, expuso que nació el 25 de diciembre de 1965 así que cumplió 50 años de edad el mismo día y mes del año 2015; se vinculó como trabajador oficial para la demandada desde el 29 de noviembre de 1989 alcanzando los 20 años de servicio en el 2009; entre Sintradepartamento y la Gobernación de Antioquia se han suscrito varias convenciones colectivas de trabajo, entre ellas la del 11 de febrero de 2019 que se encuentra vigente; se afilió a dicha organización sindical el 24 de mayo de 2001 por lo que es beneficiario de las normas convencionales; en la recopilación de normas convencionales, la pensión de jubilación se encuentra regulada en el art. 96 y los arts. 99 y 100 establecen la forma de liquidación; reclamó administrativamente, pero la petición fue negada mediante Resolución n.º 2019060005583 del 22 de febrero de 2019 con el argumento de que ha debido cumplir con los requisitos establecidos convencionalmente antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo n.º 01 de 2005 (págs. 4-6 arch. 1 C01).

## **II. TRÁMITE PROCESAL**

Mediante auto del 10 de diciembre de 2021 se admitió la demanda y se ordenó la notificación y traslado a la demandada (arch. 2 C01), quien contestó con oposición bajo el argumento de que no es posible desconocer lo establecido en el Acto Legislativo n.º 01 de 2005 respecto de la vigencia de las convenciones colectivas que consagraban condiciones pensionales más favorables que las que actualmente rigen el sistema pensional, sin que el demandante hubiera reunido los requisitos pensionales de edad antes del 31 de julio de 2010, ya que en esa época contaba con un poco más de 20 años de servicios y 44 años de edad, cumpliendo los 50 años el 25 de diciembre de 2015; agregó que el demandante ha trabajado por espacio de 29 años y 62 días con cotizaciones a Pensiones de Antioquia. Propuso como excepciones de fondo las que denominó imposibilidad jurídica de reconocer y pagar pensión de jubilación convencional, inexistencia de obligación y falta de causa para pedir (págs. 1-16 arch. 8 C01).

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a pesar de habersele comunicado de la existencia del presente proceso, guardó silencio (arch. 3 C01).

## **III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

El Juzgado 17 Laboral del Circuito de Medellín, en audiencia celebrada el

21 de junio de 2022, profirió sentencia en la que condenó a la demandada a reconocer y pagar al demandante la pensión de jubilación consagrada en la cláusula 12 de la CCT del 9 de diciembre de 1970 y el art. 96 de la recopilación de normas convencionales y laudos arbitrales, a partir del retiro efectivo del servicio con el IBL calculado del promedio de los salarios devengados en el último año de servicios teniendo en cuenta los factores enlistados en el art. 3º de la Ley 33 de 1985 modificado por el art. 1º de la Ley 62 de la misma anualidad, en armonía con el art. 1º del Decreto 1158 de 1994, que modificó el art. 6º del Decreto 691 de 1994, con una tasa de reemplazo del 80% sobre el IBL y a razón de 13 mesadas por año, con la autorización de descontar los aportes *«en salud y pensiones a que haya lugar»*, prestación que será compartible con la pensión de vejez que eventualmente le sea reconocida al demandante por parte del sistema general de seguridad social, caso en el que la Gobernación de Antioquia continuará pagando el mayor valor existente entre una y otra prestación; absolvió a la demandada de las demás pretensiones incoadas en su contra e impuso costas a su cargo.

Para lo que interesa a la alzada, motivó la decisión en que, la edad no es un requisito para la causación del derecho a la pensión, sino de disfrute y que además, ya jurisprudencialmente se ha establecido que en el caso del Departamento de Antioquia no es necesario que la pensión sea causada con anterioridad al año 2010, si las cláusulas contienen una extensión de sus efectos que van más allá del límite establecido por el Acto Legislativo 01 de 2005; agregó que en su sentir, las cláusulas 96 y 99 de la CCT de la Gobernación no establecen que los requisitos de tiempo de servicios prestados y edad se deban causar en forma simultánea, de manera que en este caso, solo era necesario cumplir con el tiempo de servicios exigido antes del 31 de julio de 2010, teniendo entonces el demandante un derecho adquirido, aunado a que la cláusula 12 tampoco exige el cumplimiento de los 50 años de edad estando al servicio del Departamento.

Agregó que la pensión resulta incompatible con el salario que recibe el demandante al continuar vinculado con el Departamento pues no se ha acreditado el retiro del servicio; en relación con factores salariales indicó que como la CCT no consagra expresamente los que deben observarse para liquidar la prestación, se puede acudir a las normas legales que regulan la materia como en este caso lo es la Ley 33 de 1985. Concedió 13 mesadas anuales dado que *«para el momento del disfrute que se hace con la edad, ya no estaba vigente la mesada 14»*. Finalmente adujo que en principio la prestación estaría afectada del

fenómeno extintivo de la prescripción dado que el demandante tiene acceso a la prestación desde el año 2015 y reclamó en el 2019, sin embargo, como la prestación «*se hace con fecha de causación a partir del momento del retiro efectivo del servicio*» no hay ninguna mesada prescrita, en todo caso, dijo que cualquier prestación causada antes del 6 de febrero de 2017 [sic] estaría prescrita (archs. 12, 14 C01).

#### IV. RECURSOS DE APELACIÓN

La **demandante** argumentó que la base de liquidación de la pensión de jubilación debe ser la misma que dispone la convención colectiva en su art. 100, el cual se debe interpretar de manera favorable hacia el trabajador.

La **Gobernación** señaló que el demandante no reunió los requisitos de edad establecidos en la CCT, antes de que perdiera vigencia de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005, que acabó con los regímenes pensionales convencionales tal y como lo han sostenido las altas cortes en múltiple jurisprudencia, dentro de la cual se destaca la SU-555-2014, por tanto, el demandante no cuenta con un derecho adquirido ni una expectativa legítima porque si bien tenía cumplido el tiempo de servicio, no alcanzó la edad establecida en la CCT. En gracia de la discusión señaló que, los factores salariales con los cuales se liquidaría la prestación solo pueden ser los mismos sobre los cuales se efectuaron las cotizaciones teniendo en cuenta que se trata de un trabajador oficial. Finalmente indicó que las costas no se compadecen con la actividad probatoria ejecutada por la parte actora, por tanto, deben ser revocadas.

#### V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Recibidas las diligencias en esta Corporación, mediante auto del 19 de septiembre de 2022 se admitieron los recursos de apelación interpuestos y conforme a lo normado en el art. 13 de la Ley 2213 de 2022, en proveído del 21 de noviembre de 2022, se dispuso correr el respectivo traslado a las partes para alegar, sin embargo, solamente presentó alegaciones el demandante insistiendo en los argumentos de su apelación (archs. 2-4 C02).

#### VI. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites de segunda instancia, sin causal de nulidad que invalide lo actuado, esta Colegiatura procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes así como el grado jurisdiccional de consulta en favor de la Gobernación, y de conformidad con lo previsto en los art. 66A y 69 del CPTSS, el problema jurídico a resolver consiste en determinar si el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación convencional o si por el contrario, se encuentra sometida al límite establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005; de resultar procedente el reconocimiento, se verificará lo atinente a los factores salariales que se deben tener en cuenta para efectos de liquidar la prestación.

La convención colectiva se ha definido legalmente como la herramienta que tiene el trabajador para mejorar las condiciones que se derivan de la relación laboral y que son pactadas entre el empleador y la organización sindical que lo representa (art. 467 del CST).

De manera que este tipo de normas, tienen plenos efectos y se convierten en ley para las partes que las suscriben, en virtud del elemento de obligatoriedad que se predica para el cabal cumplimiento de quienes se encuentran vinculados en una relación laboral; de ahí que no es propio del fallador darle un alcance distinto a una cláusula originada en convención o Pacto colectivo, cuando en consenso, las partes involucradas le dan una interpretación.

En el presente proceso no fue objeto de discusión que el demandante: **i)** nació el 25 de diciembre de 1965 (págs. 37-39 arch. 1 C01); y **ii)** presta servicios para el Departamento de Antioquia, desde el 29 de noviembre de 1989 en calidad de trabajador oficial en el cargo de Auxiliar (T.O.) Código 986 Grado 3 adscrito a la planta global de la Administración Departamental, como da cuenta la certificación expedida el 11 de octubre de 2021 por la Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional de la Gobernación de Antioquia y la Resolución n° 2019060005583 de 2023 (págs. 25-36, 40 C01).

La Convención Colectiva de Trabajo sobre la cual descansan las pretensiones, fue suscrita el 9 de diciembre de 1970 entre el Gobierno Departamental de Antioquia y el Sindicato de Trabajadores al servicio del mismo gobierno y en su art. 12 regula la pensión de jubilación en los siguientes términos: *«El Gobierno Departamental continuará reconociendo la pensión de*

*jubilación a todos sus trabajadores, al cumplir veinte (20) años de trabajo y cincuenta (50) años de edad (...)*» (págs.. 42-47 arch. 1 C01).

En las convenciones subsiguientes como las suscritas para los períodos 1973-1974, 1979-1980, 1981-1982, 1982, no se dijo nada en relación con esta prestación (págs. 48-102 *ídem*); y en el laudo arbitral del 24 de junio de 1999 se estableció que a partir de su ejecutoria, todos los trabajadores oficiales que se vinculen al departamento y que sean beneficiarios de la convención colectiva, se registrarán en materia pensional por la Ley 100 de 1993 y las normas que la modifiquen, reglamenten o adicionen (págs.. 103-119 *ídem*).

Sin embargo, en la Recopilación de Normas Convencionales y laudos Arbitrales Vigentes entre 1945-2002, en el art. 96 se retomó la pensión de jubilación exactamente en los mismos términos reseñados en el art. 12 de la CCT de 1970 y en el laudo y se adicionó que, la Ordenanza n° 4 de 1975 exige solo 25 años de servicio al departamento para una pensión del 100% (págs. 119- 166 *ibídem*)

Desde el 24 de mayo de 2001 y para el 10 de noviembre de 2021 el demandante se encontraba afiliado al Sindicato de Trabajadores y Empleados del Departamento de Antioquia – Sintradespartamento (pág. 41 arch. 1 C01); por tanto, es beneficiario de la convención colectiva de trabajo y laudo arbitral vigentes.

Al respecto, es preciso indicar que la Corte Constitucional en sentencias CC SU-267-2019, CC SU-445-2019 y CC SU-027-2021 y aludió a la naturaleza jurídica de las convenciones colectivas de trabajo como fuente formal de derecho, que debe ser interpretada a la luz de los cánones de interpretación aplicables a cualquier norma de trabajo; señaló que, en la lectura de esos acuerdos se debe dar siempre aplicación al principio de *indubio pro operario*; y, para el caso concreto de la Convención Colectiva de la Gobernación de Antioquia, analizó la cláusula convencional en discusión y concluyó que «...la cláusula duodécima no le exige [al trabajador] *cumplir la edad de 50 años estando al servicio del departamento...*» (texto entre corchetes de la Sala). Esta interpretación fue reiterada en la CC SU-022-2013.

Frente a las decisiones en comento, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, profirió las sentencias CSJ SL4048-2019, CSJ SL2415-

2020, CSJ SL3720-2020 y CSJ SL1308-2023, en las que acogió tal interpretación por ser la más favorable a los trabajadores de la Gobernación de Antioquia, así que solo es necesario el cumplimiento del requisito del tiempo de servicio antes del límite establecido en el parágrafo transitorio 3º del Acto Legislativo 01 de 2005, esto es, antes del 31 de julio de 2010, independientemente de que la edad se cumpla estando vigente o no el vínculo contractual.

De esta forma, se tiene que según la certificación expedida el 11 de octubre de 2021 por la Secretaría de Talento Humano y Desarrollo Organizacional de la Gobernación de Antioquia, el demandante para esa data todavía continuaba prestando servicios para el Departamento, y en la contestación de la demanda radicada el 11 de enero de 2022 se afirmó que Diego Vélez seguía vinculado, por lo que para esa época completaba un espacio de *10.502 días (29 años y 62 días)* (pág. 40 arch. 1, págs. 1-16 arch. 8 C01); por ende, cumplió los 20 años de servicio el 29 de noviembre de 2009 y como alcanzó los 50 años de edad el 25 de diciembre de 2015 (págs. 37-39 arch. 1 C01), no se equivocó la *a quo* al concluir que, en efecto, el demandante tiene derecho a que le sea reconocida la pensión de jubilación convencional, la cual dejó causada en el momento en el que completó el tiempo de servicios y podía exigirla desde el momento en que llegó a la edad prevista en la CCT.

Así ocurrió, pues la solicitud de la pensión de jubilación se elevó el 6 de febrero de 2019, sin embargo, fue negada mediante Resolución n° 2019060005583 del 22 del mismo mes y año bajo el argumento de que el demandante arribó a la edad pensional con posterioridad al límite establecido por el Acto Legislativo 01 de 2005 (págs. 23-36 arch. 1, págs. 21-36 arch. 8 C01); situación y discusión que, como se vio, jurisprudencialmente y para el caso específico de los trabajadores oficiales beneficiarios de la Convención Colectiva suscrita entre la Gobernación de Antioquia y la Organización Sindical Sintradepartamento, ya ha quedado zanjada.

Corolario de lo anterior, el disfrute de la prestación ocurrirá en cuanto se acredite el retiro del demandante como trabajador del Departamento de Antioquia, tal y como se dispuso en el art. 98 de la Recopilación de Normas Convencionales y laudos Arbitrales Vigentes entre 1945-2002 (págs. 159 arch. 1 C01) y será compartible con la pensión de vejez que eventualmente le sea reconocida por parte del fondo al cual se encuentre afiliado, al tenor de lo dispuesto en el art. 5º del Acuerdo 029 de 1985, dado que en los textos

convencionales ni en el laudo arbitral, no se dispuso lo contrario. En consecuencia, no le asiste razón a la demandada y se **confirmará** lo decidido por la *a quo* frente a los aspectos hasta aquí estudiados.

En lo que tiene que ver con la forma de liquidar la prestación, se ha de indicar que, previo el retiro del trabajador, la prestación se deberá calcular con el *«equivalente al 80% del promedio mensual de los salarios devengados por el trabajador en el último año de labores»* tal y como se estableció en el art. 99 de la Recopilación de Normas Convencionales y laudos Arbitrales Vigentes entre 1945-2002, que en ese sentido agrupó lo otrora indicado en el art. 7º de la CCT del 30 de noviembre de 1978 (pág. 159 arch. 1 C01); de ahí que no haya incurrido en error alguno la juzgadora de primera instancia.

Sin embargo, los conceptos salariales a ser tenidos en cuenta para el establecimiento del salario base para la liquidación de la pensión convencional, **sí** se encuentran estimados dentro del texto de la pluricitada Recopilación de Normas Convencionales, pues en su art. 100 se dispuso como variables para incluir en la liquidación del salario promedio para las pensiones de jubilación y de invalidez, la prima de vacaciones *«aunque los trabajadores que vayan a disfrutar de dichas pensiones no tengan todo el tiempo del servicio con el Departamento»*, más el subsidio familiar *«tengan o no cuota parte con otra entidad»* y los viáticos que *«haya devengado al servicio del departamento durante el último año de labores o durante el tiempo servido si fuere menos de un año»* (págs. 159 arch. 1 C01); en consecuencia, le asiste la razón al demandante frente a este aspecto, lo que conlleva a **modificar** el numeral **primero** de la sentencia apelada.

De otro lado, frente al número de mesadas anuales si bien la Sala considera que al haber sido causada la prestación con el cumplimiento del tiempo de servicios, que acaeció con anterioridad al 31 de julio de 2011, podría ser otorgada a razón de 14 mesadas anuales de conformidad con lo establecido en el parágrafo transitorio 6º del Acto Legislativo 01 de 2005, en caso de que no supere su liquidación los 3 SMLMV; la verdad es que ello no fue objeto de apelación por el actor, así que en virtud del principio de la *non reformatio ni pejus* se **confirmará** lo decidido por la *a quo* que concedió 13 mesadas anuales.

Debido a que dentro del expediente no obra constancia del retiro del demandante, respecto de quien se presume, continúa como trabajador al servicio del Departamento de Antioquia, no existiría ninguna mesada afectada del



fenómeno de la prescripción, pues en todo caso, según la contestación de la demanda que fue radicada el 11 de enero de 2022, para esa data Diego Vélez aún se encontraba en servicio activo, motivo adicional por el cual no es posible emitir una condena en concreto al tenor de lo dispuesto en el art. 283 del CGP. No obstante, en cuanto él ingrese en nómina de pensionados de la Gobernación, este ente territorial se encuentra autorizado para descontar lo atinente a los aportes a la seguridad social.

Finalmente, en lo que tiene que ver con las costas que fueron apeladas por la demandada, ha de indicarse, por un lado, que según lo dispuesto en el num. 1º del art. 365 del CGP la condena por este rubro se debe imponer a quien haya resultado vencido en juicio, como en este caso sucedió con la Gobernación de Antioquia; en consecuencia, se **confirma** lo decidido por la *a quo*. Por otra parte, si lo que pretendía impugnar es el monto fijado por la *a quo* como agencias en derecho, no es esta la oportunidad para ello, pues conforme el num. 5º del art. 366 *idem* ello solo se podrá controvertir mediante los medios establecidos para el efecto, una vez se apruebe la liquidación de costas; por lo que a la Sala no le es posible emitir pronunciamiento alguno al respecto.

En los anteriores términos quedan estudiados los recursos interpuestos y el grado jurisdiccional de consulta en favor de la Gobernación. Sin costas en la alzada ante su no causación.

En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Decisión Laboral del **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

#### **RESUELVE:**

**PRIMERO: MODIFICAR** el numeral **primero** de la sentencia proferida el 21 de junio de 2022 por el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Medellín, en el sentido de ordenar a la Gobernación de Antioquia que para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación convencional de Diego de Jesús Vélez Rojas, tenga en cuenta como variables a incluir en el salario promedio, la prima de vacaciones, el subsidio familiar y los viáticos conforme lo establecido en los arts. 99 y 100 de la Recopilación de Normas Convencionales y laudos Arbitrales

Vigentes entre 1945-2002, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

**SEGUNDO: CONFIRMAR** en lo demás la sentencia apelada.

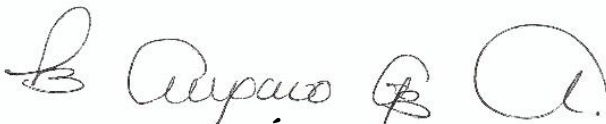
**TERCERO:** Sin costas en la alzada ante su no causación.

**CUARTO:** Esta sentencia se notificará a través de **EDICTO**, atendiéndose los términos previstos en el art. 41 del CPTSS.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

**LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE**

Magistrada ponente



**LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**

Magistrada



**MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**

Magistrada

(\*) Hipervínculo de consulta de expediente digitalizado:

<https://etbcsj->

[my.sharepoint.com/:f/g/personal/des17sltsmed\\_cendoj\\_ramajudicial\\_gov\\_co/EjOB9\\_QIR\\_xNsAHdtOcFtDwBQsc-8EWWuVc\\_uvDYjYsQ5Q?e=2AcO3b](https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f/g/personal/des17sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/EjOB9_QIR_xNsAHdtOcFtDwBQsc-8EWWuVc_uvDYjYsQ5Q?e=2AcO3b)

Firmado Por:

Luz Patricia Quintero Calle

Magistrada

Sala 017 Laboral

Tribunal Superior De Medellín - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **dbf125ffc659399a08a6b5239848ed6432f4c91288651a6b80e7e0d9ea1f701d**

Documento generado en 27/11/2023 03:27:34 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**